

«Fallo: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Vivas Bellón, en su propio nombre contra la Resolución de 2 de agosto de 1988 del Ministerio para las Administraciones Públicas, que en alzada confirma otra anterior de la MUNPAL de 23 de marzo de 1988, debe declarar y declara que procede señalar la pensión de jubilación valorando los treinta y dos años de servicios reconocidos, anulando la Resolución impugnada en cuanto se opone a tal declaración, por no resultar en ello ajustada a Derecho. Sin que haya lugar a expresa imposición de costas a ninguna de las partes.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 9 de julio de 1991.-El Ministro para las Administraciones Públicas.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

**22078** *ORDEN de 9 de julio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo 591/1988, promovido por doña Candelaria Díaz Fumero.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha dictado sentencia, con fecha 20 de marzo de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 591/1988, en el que son partes, de una, como demandante, doña Candelaria Díaz Fumero, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 29 de julio de 1988, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra otras de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fechas 7 de abril y 11 de mayo de 1988, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimar el recurso anulando el acto recurrido por contrario a Derecho, declarando el derecho de la recurrente a que se le abonen las cantidades reclamadas con arreglo a los baremos establecidos y con deducción de lo ya percibido, sin expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 9 de julio de 1991.-El Ministro para las Administraciones Públicas.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

**22079** *ORDEN de 9 de julio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 1811/1987, promovido por don Jesús Sánchez Váñez, don Antonio Arce Fernández, don José Arias Romero, don Alfonso Carmona de Alda, don José Barrado Pascua, don Manuel Ricote Gordo y don Plácido Alvarez Olmedilla.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 26 de enero de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 1.811/1987, en el que son partes, de una, como demandante, don Jesús

Sánchez Váñez, don Antonio Arce Fernández, don José Arias Romero, don Alfonso Carmona de Alda, don José Barrado Pascua, don Manuel Ricote Gordo y don Plácido Alvarez Olmedilla, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 24 de febrero de 1987, que desestimaba los recursos de reposición interpuestos contra otras de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de diversas fechas, sobre incompatibilidades.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que inadmitimos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los recurrentes don Jesús Sánchez Váñez, don Antonio Arce Fernández, don José Arias Romero, don José Barrado Pascua y don Manuel Ricote Gordo, al haber interpuesto extemporáneamente el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Alfonso Carmona de Alda y don Plácido Alvarez Olmedilla contra la Resolución de la Subsecretaría para las Administraciones Públicas, de fecha 24 de febrero de 1987, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra anteriores resoluciones del mismo Ministerio, sobre incompatibilidad de funciones en el sector público; declarando que tales actos administrativos son conformes a Derecho, y absolviendo a la Administración de las pretensiones contenidas en la demanda; sin condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 9 de julio de 1991.-El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

**22080** *ORDEN de 9 de julio de 1991 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo 2024/1989, promovido por doña Mercedes Viella Camos.*

Ilmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dictado sentencia, con fecha 22 de marzo de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 2024/1989, en el que son partes, de una, como demandante, doña Mercedes Viella Camos, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución presunta del Ministerio para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 5 de octubre de 1988, sobre reintegro al servicio activo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Segunda, ha decidido:

Primero.-Desestimar el recurso.

Segundo.-No hacer expresa mención sobre costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 9 de julio de 1991.-El Ministro para las Administraciones Públicas.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.